

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ
DEMANDADO	AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-004-2018-00652-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993.
DECISIÓN	Modifica y confirma

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 021**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer el asunto, por parte de este colegiado, a efectos de resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 14 de diciembre de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso en síntesis que, el señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ, se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para los riesgos de invalidez, vejez, y muerte, y realizó aportes a dicha entidad desde el 23 de junio de 1994 hasta el 31 de enero de 1995.

Luego a partir del 1° de abril de 1995, se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A., con quien realizó aportes hasta el 30 de junio de 2010, fecha en que decidió regresar régimen de prima media donde continuó efectuando cotizaciones hasta el mes de abril de 2015.

Que encontrándose afiliado a COLPENSIONES, fue calificado por el área de medicina legal de dicha entidad, quien mediante dictamen N° 3952 del 8 de junio de 2011, estableció una pérdida de capacidad laboral del 68.65%, con fecha de estructuración del 20 de febrero de 2002.

En vista de lo anterior, y al creer reunidos los requisitos legales para una pensión de invalidez de origen común, elevó solicitud ante COLPENSIONES el día 20 de enero de 2012, sin embargo, dicha entidad mediante resolución N° GNR-174092 del 8 de julio de 2013, se declaró incompetente para reconocer la prestación, pues para la fecha en que la misma se estructuró el actor se encontraba válidamente afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A.

Ante tal negativa, el actor decidió radicar una segunda reclamación pensional ante la AFP PROTECCIÓN S.A., el día 27 de enero de 2015, no obstante, dicho fondo solo vino a reconocer el derecho más de 3 años después

de haberse radicado la solicitud, mediante comunicado del 5 de abril de 2018, pero condicionando su reconocimiento a trámites administrativos, y a título de retroactivo pensional dispuso el pago de \$114.887.934, por el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 2002 al 30 de marzo de 2018, suma que fue cancelada el día 4 de mayo de 2018.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE CONDENE a la AFP PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación sobre las mesadas retroactivas reconocidas mediante comunicado del 5 de abril de 2018, y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la AFP PROTECCIÓN S.A. la contestó a través de su vocera judicial (fls. 128 al 144 del archivo PDF 001), manifestando frente a los hechos expuestos que son ciertos aquellos relativos al traslado y afiliación al fondo privado, pero aclara que este en realidad ocurrió mediante solicitud del 13 de noviembre de 1996, donde efectuó aportes hasta el mes de junio de 2010, pues en el mes de mayo de ese mismo año, el actor suscribió solicitud de vinculación al régimen de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES.

Acepta la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada al demandante, y la solicitud pensional que hiciere ante PROTECCIÓN S.A., el día 27 de enero de 2015, sin embargo, destaca que para ese momento el demandante no contaba con toda la documentación necesaria para acreditar su derecho, no tenía una historia laboral reconstruida, ya que se encontraba realizando aportes a COLPENSIONES, y era imposible determinar si reunía la densidad mínima de cotizaciones para causar una pensión de invalidez en los términos del art. 39 de la Ley 100 de 1993, aduciendo que fue COLPENSIONES la que propicio la mora en el reconocimiento pensional, pues se tardó demasiado en brindar la información necesaria, por lo que la pensión

apenas se otorgó mediante comunicado del 5 de abril de 2018 cuando la historia laboral estaba reconstruida, sin que le consten los restantes supuestos fácticos los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA PEDIR; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO; BUENA FE POR PARTE DE LA DEMANDADA; COMPENSACIÓN; PRESCRIPCIÓN; y la INNOMINADA O GENÉRICA”*.

Y como excepción previa formuló la de *“FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO POR PASIVA”* frente a COLPENSIONES.

La referida excepción fue acogida por el juez de primer grado, en audiencia pública realizada el 9 de julio de 2020, ordenándose la vinculación de COLPENSIONES en calidad de litisconsorte necesario por pasiva.

COLPENSIONES, dio respuesta oportuna a la demanda, según se aprecia a folios 1 al 8 del archivo PDF 06, indicando frente a los hechos narrados por la parte activa, que son ciertos aquellos relativos a la afiliación inicial al ISS, el traslado al fondo privado, y el posterior retorno al régimen de prima media con prestación definida, así como la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada al actor por la junta médica de COLPENSIONES, sin que le consten los restantes supuestos fácticos los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“LA INNOMINADA; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO; PRESCRIPCIÓN; BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA; e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar al señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por

el retardo en el pago de las mesadas pensionales de invalidez, causados desde el 28 de mayo de 2015 y hasta el 3 de mayo de 2018 en la suma de \$79.735.618.

También condenó a la AFP PROTECCIÓN S.A., a indexar la anterior condena, desde el 3 de mayo de 2018 y hasta el momento en que se efectué el pago total de la obligación.

De otro lado, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos, declarando probada a su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Y finalmente impuso las costas del proceso en segunda instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., y en favor del demandante y COLPENSIONES, las agencias en derecho a favor del demandante se estimaron en la suma de \$6.000.000, y a favor de COLEPENSIONES en la suma de \$1.000.000.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que de conformidad con las normativas que regulan la problemática de la multifiliación (Decreto 3800 de 2003, Decreto 692 de 1994, y el Decreto 3995 de 2008), el siniestro lo debe asumir la AFP PROTECCIÓN S.A., al ser esta la entidad a la que se encontraba afiliado el demandante y se efectuó la última cotización al momento de la causación de la pensión, que tratándose de una pensión de invalidez, corresponde a la fecha de su estructuración.

Que la AFP PROTECCIÓN S.A., se encuentra obligada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios deprecados, pues con su actuar y negligencia desconoció dos términos legales, el primer término era de 1 mes para resolver la solicitud de multifiliación, y el segundo de 4 meses para proceder con el reconocimiento y pago de la pensión.

Y en el presente asunto, está demostrado que desde el 21 de septiembre de 2015 el comité de multifiliación definió que era la AFP PROTECCIÓN S.A. la competente para reconocer la pensión de invalidez deprecada, sin embargo, desconociéndose todos los términos legales, la pensión de invalidez apenas se

reconoció en el año 2018, esto es, más de 3 años y 3 meses después de la solicitud pensional, a sabiendas que los requisitos para causar una pensión de invalidez son los mismos en ambos regímenes, y por ello la AFP PROTECCION S.A., estaba enterada que el actor si reunía la densidad mínima de cotizaciones.

Señaló que la responsable en la tardanza en el reconocimiento pensional fue la AFP PROTECCIÓN S.A. quien debió haber adelantado todos los trámites necesarios dentro de los 4 meses siguientes a la solicitud pensional, y al no hacerlos, dejó al demandante a la deriva durante más de 3 años, a sabiendas que este presentaba una pérdida de capacidad laboral superior al 68%. Motivos por los cuales, condenó al pago de los intereses moratorios a partir del 28 de mayo de 2015 y hasta el 3 de mayo de 2018, fecha a partir de la cual dispuso la indexación de las condenas, para garantizar que la suma adeudada se pague a su valor real y actualizado.

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

APELACIÓN DE LA AFP PROTECCIÓN S.A.: su apoderada judicial dice no estar de acuerdo con la condena a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues considera que si era necesario consolidar el capital y la historia laboral del demandante para poder resolver la solicitud pensional, liquidar la prestación económica, y tener certeza de la necesidad de contratar o no una renta vitalicia para financiar la pensión de invalidez, pues para la fecha en que el actor elevó la solicitud pensional, sus aportes estaban en el régimen de prima media y solo hasta el mes de octubre COLPENSIONES procedió a trasladar la totalidad de los aportes.

Refiere no estar de acuerdo con el valor de la condena a los intereses moratorios, pues según las estimaciones que había realizado el fondo, la eventual condena por este concepto, rondaba el 50% de lo ordenado por el a quo. Encontrando igualmente desproporcionada la condena a las costas procesales y agencias en derecho, motivos por los cuales solicita la revocatoria

de la sentencia de primer grado, y en su lugar se absuelva a la AFP accionada de la totalidad de pretensiones y cargos formulados en su contra.

Alegatos de conclusión

Encontrándose en la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial del demandante, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, insistiendo en la prosperidad de la condena a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al igual que la indexación de tal condena, toda vez que la responsabilidad del fondo es profesional, misma que le exige la administración de un servicio público de carácter esencial como es la seguridad social. Por lo que, ante el incumplimiento de su obligación de reconocer la prestación pensional dentro de los términos establecidos legalmente para ello, aun cuando estaban dados los requisitos para su reconocimiento, es imperativa la causación de los intereses reclamados, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia nacional (CSJ SL1681-2020, reiterada en sentencia SL 3130 de 2020).

A su turno la apoderada judicial de COLPENSIONES, solicita se confirme la decisión de primer grado, en cuanto declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la administradora pública de pensiones, toda vez que para la fecha en la que se estructuró la invalidez del demandante, este se encontraba afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A., razón por la cual la entidad encargada de tramitar y decidir la prestación económica solicitada por el actor es la AFP PROTECCIÓN S.A., y no Colpensiones, quien siempre actuó en legalidad.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993: Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica,

como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, el problema jurídico estriba en dilucidar si en el sub examine, hay o no lugar al reconocimiento judicial de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el retardo en el pago de del retroactivo de la pensión de invalidez de origen común reconocida a favor del señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ.

Para resolver debe recordarse que los citados intereses moratorios, tienen su consagración o fundamento legal en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.”

La citada normativa deja en claro, que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social en pensiones, están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados y a aquellos beneficiarios a quienes se les hubiere reconocido su derecho prestacional por fuera de los plazos establecidos para las diferentes contingencias, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.

La procedencia de los intereses moratorios ha sido un tema sobre el cual se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, memorándose para ello la sentencia SL-33761 del 31 de marzo de 2009, reiterada luego en providencias más recientes como la SL-2587 de 2019 y la SL-658 de 2020, en la primera de estas providencias se adoctrinó lo siguiente:

“...Corresponde agregar que la finalidad del artículo 141 de la Ley 100 fue afianzar el carácter vital de la pensión, propender por su pronto pago y proteger a los pensionados, disuadiendo las dilaciones en su trámite y por ello los intereses moratorios antes que ser una sanción para la entidad obligada, son una medida resarcitoria en el caso del no pago oportuno de la mesada, y por lo mismo hay que entender que se causan desde el momento en que debe hacerse el pago y no se realiza...”

Ahora bien, como su nombre lo indica, estos intereses se causan a partir de la fecha en que la administradora o fondo de pensiones se encuentra en mora en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, una vez se tenga la condición de pensionado o lo que es lo mismo, sea titular del derecho, lo cual ocurre, para el evento de las pensiones de vejez e **invalidez**, cuatro (4) meses después de presentada la solicitud pensional al fondo o administradora de pensiones, acompañada de la documentación en la que se acredite el derecho, así lo determina el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, término dentro del cual no corre la carga de pagar dichos intereses moratorios contra de la entidad.

*“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, **con la correspondiente documentación que acredite su derecho**. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.*

EL CASO CONCRETO:

Se encuentra probado en el proceso que al demandante le asiste derecho a una pensión de invalidez de origen común, pues así le fue reconocida mediante comunicación del 5 de abril de 2018, con fundamento en un dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por medicina laboral de COLPENSIONES, donde se concluyó que el actor presentada una pérdida de capacidad laboral del 68.65% derivada de origen común y con fecha de estructuración del 20 de febrero de 2022, según consta a folios 156 y 157 del archivo PDF 01.

Igualmente está probado con la respuesta al HECHO QUINTO de la demanda (folios 130 del archivo PDF 01), que el actor elevó solicitud pensional ante la AFP PROTECCIÓN S.A. el día 27 de enero de 2015.

AL QUINTO. Este hecho contiene varias afirmaciones que se contestan en forma separada así:

- **ES CIERTO** que el demandante el día 27 de enero de 2015 presentó solicitud de prestación económica por invalidez ante esta administradora.
- **NO ES CIERTO** que para la fecha de presentación de la solicitud de prestación económica por invalidez, el demandante contara con toda la documentación que acreditaba su derecho para acceder a la pensión de invalidez en el RAIS, pues no contaba para esa fecha con la historia laboral debidamente reconstruida, ya que para ese entonces el mismo se encontraba realizando aportes a Colpensiones y en ese sentido, no era posible determinar o verificar si cumplía o no con el requisito de semanas exigido por el artículo 39 de la ley 100 de 1993, hasta tanto Colpensiones procediera a trasladar y a acreditar la totalidad de los aportes realizados por el demandante al Sistema General de Pensiones.

Por lo que la AFP PROTECCIÓN S.A. contaba hasta el 27 de mayo de 2015, para proceder con el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, cuando vencía el plazo de cuatro (4) meses establecido en el art. 9° de la Ley 797 de 2003, tratándose de pensiones de vejez e invalidez.

Sin embargo, la AFP PROTECCIÓN S.A. solo procedió con el reconocimiento y pago de la prestación económica de invalidez el día **4 de mayo de 2018**, justificando su tardanza en una situación de multi-afiliación que presentaba el demandante para el año 2015, y en la demora de COLPENSIONES de trasladar los aportes al régimen de ahorro individual con solidaridad, mismos que eran necesarios para determinar tanto el valor de la mesada pensional como la procedencia o no de una renta vitalicia, para garantizar la financiación de la pensión de invalidez de origen común.

No obstante, estas causales de justificación que aduce la AFP accionada a juicio de la Sala no resultan válidas para lograr su exoneración de la condena a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues precisamente todos aquellos inconvenientes de tipo administrativo, incluido allí el problema de multifiliación que llegó a presentar el demandante, debieron disiparse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la solicitud pensional.

Pues desde el Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se prohibió de manera expresa multifiliación, y luego en el art. 5 del Decreto 3800 de 2003 compilado en el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, se dieron las pautas para definir que administradora o fondo de pensiones era la competente para asumir una

prestación económica causada cuando un afiliado se encontraba en situación de múltiple vinculación, veamos:

“ARTÍCULO 5o. *En los casos en que durante el tiempo en que el afiliado se encontraba en situación de múltiple vinculación, se hubiere presentado un siniestro por invalidez o muerte no procederá el traslado al que se refiere el artículo 1o del presente Decreto, correspondiéndole a la entidad administradora que haya recibido las cotizaciones en la fecha del siniestro o a aquella que haya recibido la última cotización antes de ocurrido el siniestro, el reconocimiento y pago de las prestaciones correspondientes, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.*

PARÁGRAFO. *Para los efectos del presente artículo se entenderá como fecha del siniestro la fecha de la muerte o la que determine el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez como fecha de estructuración de la invalidez.*

Y luego el art. 6° del Decreto 3995 de 2008, insistió en el mismo criterio para solucionar situaciones de multiafiliación, introduciendo un término de 1 mes para tales efectos, veamos:

“ARTÍCULO 6o. MÚLTIPLE VINCULACIÓN EN CASOS DE SINIESTROS. *<Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.6 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en este decreto, deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.*

Si a dicha fecha el trabajador no estuviera cotizando, las respectivas prestaciones serán reconocidas y pagadas, si se cumplen los requisitos establecidos por la ley para tener derecho a estas, por la administradora ante la cual se efectuó la última cotización antes de la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.

Si cumplido el procedimiento anterior no puede determinarse la administradora responsable de la prestación, porque coinciden cotizaciones realizadas a otras administradoras a esa fecha, la administradora responsable será aquella ante la cual se haya efectuado la última vinculación válida.

Sin perjuicio de la atención al término legalmente señalado para el reconocimiento de estas prestaciones, las administradoras involucradas en la múltiple vinculación

tendrán un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la solicitud de pensión, para determinar la administradora responsable de la prestación según la regla aquí contenida, dentro del cual deberán entregarse las sumas correspondientes al riesgo de vejez junto con sus valorizaciones y el bono pensional, si a este hay lugar, además de la información completa de la historia laboral.
(Negrillas y subrayas de la Sala)

Significa lo anterior, que dentro del término general de cuatro (4) meses al que alude el art. 9° de la Ley 797 de 2003, las administradoras involucradas en la multifiliación, debieron haber definido la competencia para resolver la solicitud pensional que hiciera el señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTINEZ, y también haber procedido con su reconocimiento y pago, en caso de acreditarse los requisitos pensionales.

Y en el presente asunto los requisitos de causación de la pensión de invalidez (art. 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original), estaban más que satisfechos, pues el actor presentaba una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y también registraba más de 26 semanas cotizadas con anterioridad al 20 de febrero de 2022 (fecha de estructuración de su estado de invalidez). No requiriéndose de requisitos adicionales para causar y acceder al disfrute pensional, como equivocadamente lo asumió la AFP accionada.

Quien a pesar de ser la encargada del reconocimiento pensional, según lo decidido en el comité de multifiliación celebrado el 31 de julio de 2015, tal y como lo reconoce la propia AFP en comunicado del 21 de septiembre de 2015, visible a folios 25 del archivo PDF 01, decidió esperarse a que COLPENSIONES le trasladare los aportes pensionales que el actor tenía en el régimen de prima media con prestación definida, desconociendo con ello el derecho fundamental a la seguridad social que le asistía al demandante, y sus condiciones de salud, que lo hacían una persona de especial protección constitucional, pues era esta pensión el ingreso periódico con el que contaba el actor para sortear sus necesidades básicas y existenciales, dada su conexión con el mínimo vital, lo que obligaba a la AFP PROTECCIÓN S.A., a reconocer y cancelar puntualmente la pensión, sin dilaciones o retardos injustificados.

Y al no existir un plazo adicional al establecido en el art. 9° de la Ley 797 de 2003, la pensión de invalidez reclamada por el señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ, debió haberse reconocido y pagado a más tardar el día 27 de mayo de 2015, máxime que en el presente asunto los requisitos de causación pensional jamás estuvieron en duda, por lo que no existe ninguna justificación en la tardanza presentada por la AFP PROTECCIÓN S.A., quien al ser la administradora competente para el reconocimiento pensional, no podía endilgarle culpas o excusarse en COLPENSIONES, pues la obligación de pago de los intereses moratorios que reclama el demandante solo están dirigida al fondo o administradora que debe asumir el reconocimiento y pago de la pensión.

Y es que esa exigencia de consolidar el capital y/o la historia laboral en el RAIS, jamás hizo parte de los presupuestos establecidos en los arts. 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, debe concluirse que esa tardanza injustificada en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada el 27 de enero de 2015, y efectivamente pagada el 4 de mayo de 2018, si da lugar a la imposición de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales comenzaron a correr a partir del primer día del quinto mes de efectuada la solicitud pensional, como bien lo coligió el juez de primer grado.

Liquidación intereses moratorios

Finalmente, y en atención al recurso de alzada, esta Sala procedió a recalcular la condena por intereses moratorios, teniendo en cuenta los extremos comprendidos entre el 28 de mayo de 2015 y el 3 de mayo de 2018, y la tasa máxima de interés moratorio vigente para ese mes de mayo de 2018, en que se efectuó el pago, y utilizando el mismo capital de \$114.887.934, causado entre el 20 de febrero de 2022 y el 30 de marzo de 2018.

Los cálculos realizados por la Sala, los cuales se ordenan incorporar a la sentencia, dieron como resultado una condena por intereses moratorios de **SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL**

SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L (\$79.550.721), suma inferior a la liquidada por el juez de primer grado que lo fue de \$79.735.618. Motivos por los cuales se **MODIFICARÁ** la sentencia de primera instancia de objeto de apelación, en cuanto al valor adeudado por concepto de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad parcial del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de AFP PROTECCIÓN S.A., no habrá lugar a imponer costas procesales en esta instancia. Las de primera instancia, continuaran a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., al ser la parte vencida en la litis, y lo fijado por agencias en derecho deberá ser controvertido en la oportunidad procesal correspondiente, tal como lo dispone el numeral 5° del art. 366 del CGP.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín de fecha 14 de diciembre de 2022, en cuanto al valor de la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 dispuesta a favor del señor FREDY ADELMO VALENCIA MARTÍNEZ, la cual quedará en la suma de **SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L (\$79.550.721)**, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: Sin COSTAS en esta instancia.

CUARTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

Liquidación intereses moratorios (004-2018-00652)

Art. 141 de la Ley 100 de 1993

Período						Liquidación sobre el salario mínimo	
Desde	Hasta	Fecha de mora	Diferencia en días	Pensión	# Mesadas	Salario mínimo	Intereses
1-may-15	31-may-15	1-jun-15	1.067	0	1	\$ 86.764.664	\$ 68.591.475
1-jun-15	30-jun-15	1-jul-15	1.037	0	2	\$ 1.288.700	\$ 990.133
1-jul-15	31-jul-15	1-ago-15	1.006	0	1	\$ 644.350	\$ 480.267
1-ago-15	31-ago-15	1-sep-15	975	0	1	\$ 644.350	\$ 465.467
1-sep-15	30-sep-15	1-oct-15	945	0	1	\$ 644.350	\$ 451.145
1-oct-15	31-oct-15	1-nov-15	914	0	1	\$ 644.350	\$ 436.346
1-nov-15	30-nov-15	1-dic-15	884	0	2	\$ 1.288.700	\$ 844.048
1-dic-15	31-dic-15	1-ene-16	853	0	1	\$ 644.350	\$ 407.224
1-ene-16	31-ene-16	1-feb-16	822	0	1	\$ 689.454	\$ 419.894
1-feb-16	29-feb-16	1-mar-16	793	0	1	\$ 689.454	\$ 405.080
1-mar-16	31-mar-16	1-abr-16	762	0	1	\$ 689.454	\$ 389.245
1-abr-16	30-abr-16	1-may-16	732	0	1	\$ 689.454	\$ 373.920
1-may-16	31-may-16	1-jun-16	701	0	1	\$ 689.454	\$ 358.085
1-jun-16	30-jun-16	1-jul-16	671	0	2	\$ 1.378.908	\$ 685.521
1-jul-16	31-jul-16	1-ago-16	640	0	1	\$ 689.454	\$ 326.925
1-ago-16	31-ago-16	1-sep-16	609	0	1	\$ 689.454	\$ 311.090
1-sep-16	30-sep-16	1-oct-16	579	0	1	\$ 689.454	\$ 295.765
1-oct-16	31-oct-16	1-nov-16	548	0	1	\$ 689.454	\$ 279.930
1-nov-16	30-nov-16	1-dic-16	518	0	2	\$ 1.378.908	\$ 529.210
1-dic-16	31-dic-16	1-ene-17	487	0	1	\$ 689.454	\$ 248.769
1-ene-17	31-ene-17	1-feb-17	456	0	1	\$ 737.717	\$ 249.240
1-feb-17	28-feb-17	1-mar-17	428	0	1	\$ 737.717	\$ 233.936
1-mar-17	31-mar-17	1-abr-17	397	0	1	\$ 737.717	\$ 216.992
1-abr-17	30-abr-17	1-may-17	367	0	1	\$ 737.717	\$ 200.594
1-may-17	31-may-17	1-jun-17	336	0	1	\$ 737.717	\$ 183.650
1-jun-17	30-jun-17	1-jul-17	306	0	2	\$ 1.475.434	\$ 334.506
1-jul-17	31-jul-17	1-ago-17	275	0	1	\$ 737.717	\$ 150.309
1-ago-17	31-ago-17	1-sep-17	244	0	1	\$ 737.717	\$ 133.365
1-sep-17	30-sep-17	1-oct-17	214	0	1	\$ 737.717	\$ 116.968
1-oct-17	31-oct-17	1-nov-17	183	0	1	\$ 737.717	\$ 100.024
1-nov-17	30-nov-17	1-dic-17	153	0	2	\$ 1.475.434	\$ 167.253
1-dic-17	31-dic-17	1-ene-18	122	0	1	\$ 737.717	\$ 66.683
1-ene-18	31-ene-18	1-feb-18	91	0	1	\$ 781.242	\$ 52.673
1-feb-18	28-feb-18	1-mar-18	63	0	1	\$ 781.242	\$ 36.466
1-mar-18	31-mar-18	1-abr-18	32	0	1	\$ 781.242	\$ 18.522
						\$ 114.887.934	\$ 79.550.721
						Retroactivo	Intereses

Fecha del cálculo	3-may-18
Periodo	20185
Interés Bancario Corriente	20,44%
Tasa E.A. Moratoria	30,66
Tasa Nominal Anual	27,04%
Tasa Nominal Diaria	0,0740906%

Retroactivo columna H (m)	\$114.887.934
Intereses columna I (m)	\$79.550.721